

Desigualdad, redistribución y crecimiento

Eduardo Bandrés*

España es uno de los países europeos donde la Gran Recesión ha tenido un mayor impacto en términos de desempleo, deterioro de las condiciones laborales y caída de la renta de las familias. Es también uno de los países con mayores índices de desigualdad en la distribución de la renta y donde esta ha tenido un aumento más destacado durante la crisis. Alcanzar un crecimiento económico sostenible se convierte así en una condición absolutamente necesaria para crear empleo y reducir la brecha social. Pero en estas condiciones, ¿puede ser la desigualdad una rémora para la recuperación de un crecimiento sostenible? Autores como Stiglitz (2012) han puesto de manifiesto que la desigualdad acumulada en los años de la expansión habría amplificado los efectos de la crisis financiera y estaría siendo un obstáculo para la obtención y consolidación de un crecimiento estable a largo plazo. La desigualdad estaría así fomentando una economía menos eficiente y menos productiva, una economía, en suma, con menor crecimiento. Este artículo es una revisión de las controvertidas relaciones entre desigualdad y crecimiento a la luz de las conclusiones más relevantes de la ciencia económica durante los últimos años.

La redistribución no daña el crecimiento. En un país con un problema estructural de insuficiencia de ingresos públicos y con un gasto social muy por debajo de la media europea el aumento de la presión fiscal no va a desencadenar un proceso distorsionador en la asignación de recursos capaz de desbaratar los efectos positivos sobre el crecimiento del gasto público en educación, pensiones o sanidad. No es arriesgado afirmar que en España crecimiento, redistribución e igualdad pueden caminar en la misma dirección durante un trecho aún bastante largo.

Las relaciones entre desigualdad y crecimiento han dado lugar a una ingente literatura teórica y empírica cuya más reciente manifestación es, sin duda alguna, uno de los éxitos editoriales más sonoros de los últimos tiempos: el libro de Piketty

(2014) sobre el capital en el siglo XXI. La dinámica que sigue la distribución de la renta y la riqueza en las economías avanzadas no se ajusta, según Piketty, a la lógica de un mecanismo económico como el que durante muchos años se articuló

* Universidad de Zaragoza.

alrededor de la curva de Kuznets y según el cual el mismo proceso de crecimiento que genera desigualdad en sus primeros estadios, conduce posteriormente a su reducción. Muy al contrario, la historia de la desigualdad sería el resultado de múltiples factores económicos, sociales y sobre todo políticos, que comprimen o expanden las desigualdades atendiendo a la intensidad con que se manifiestan en cada momento. El riesgo, viene a señalar Piketty, es que el capitalismo del siglo XXI termine dominado por la que a su juicio es la principal fuerza que amplifica las divergencias en una economía de mercado: el aumento de la tasa de retorno del capital por encima de la tasa de crecimiento económico, en un contexto donde el capital se encuentra muy concentrado. El resultado es un capitalismo "patrimonial" dominado por una creciente desigualdad, que a la larga representa una amenaza para las sociedades democráticas y los valores de la justicia social.

También en fechas muy cercanas, otro trabajo, mucho menos ambicioso en su concepción y más dirigido al ámbito estrictamente académico (Ostry, Berg y Tsangarides, 2014), analizaba precisamente el sentido inverso de la relación entre desigualdad y crecimiento: justo el que conduce de la primera al segundo. Sus conclusiones no son tan llamativas, habida cuenta que desde mediados de la década de 1990 la nueva economía del crecimiento concluía con bastante grado de consenso que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento, echando así por tierra otro de los mitos que durante bastante tiempo prevaleció bajo la forma del inevitable *trade-off* entre eficiencia y equidad al que se refiriera Okun veinte años antes. Lo novedoso es que esta reciente aportación se publica en un documento del Fondo Monetario Internacional y aunque la institución no comparta necesariamente las opiniones de los autores, no deja de ser un hecho relevante, sobre todo porque no se trata de un artículo aislado sino de un programa de investigación que ha dado lugar a otros estudios complementarios.

En las páginas que siguen vamos a profundizar, una vez más, en el sentido más controvertido

de la relación: de la desigualdad al crecimiento. La teoría convencional había sostenido la tesis de que la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza es una condición necesaria para el crecimiento. Aun sin llegar a precisar cuál es el tamaño de la desigualdad que resulta óptimo a tal efecto, se interpretaba que aquella actúa como estímulo a la innovación, el emprendimiento y el proceso de acumulación, en cuanto no pone límites exigentes a los rendimientos de los activos invertidos. Otras explicaciones mantenían lo esencial de la conclusión, pero basándola en que la mayor propensión al ahorro entre las rentas altas garantiza una elevada acumulación de activos y, por tanto, un mayor crecimiento. En consecuencia, las interferencias del sector público tratando de reducir la desigualdad socavarían el funcionamiento de la economía y limitarían el crecimiento, abriendo así el mencionado dilema entre eficiencia y equidad.

El balance final se inclina mayoritariamente del lado de quienes concluyen que la desigualdad afecta negativamente al crecimiento.

La búsqueda de regularidades empíricas y explicaciones causales sobre los efectos de la desigualdad en el crecimiento generó una vasta literatura que tuvo su momento culminante en los años noventa del pasado siglo y primeros años del actual¹. Reconociendo la valía de trabajos posteriores que han reforzado las bases teóricas de los modelos, refinado los métodos de estimación y mejorado la calidad de los datos, lo cierto es que las conclusiones principales no han cambiado mucho en relación con aquellas primeras aportaciones. El propósito que nos guía es, por tanto, revisar las conclusiones de aquella literatura acompañados de algunas significativas contribuciones que en fechas más recientes nos ayudan a comprender mejor las explicaciones que subyacen tras esas controvertidas relaciones entre desigualdad y crecimiento.

Los análisis de correlación parcial entre crecimiento y distribución de la renta para distintas

¹ Un extenso panorama de dicha literatura, en Bandrés y García Delgado (2000).

muestras de países suelen ofrecer una asociación negativa entre desigualdad y crecimiento, aunque no siempre significativa. Así por ejemplo, distintos autores obtienen una evidencia débil de tal relación y otros no encuentran vínculos simples entre desigualdad y crecimiento (OECD, 2012). Sin embargo, Ostry, Berg y Tsangarides (2014) observan una fuerte correlación negativa entre el nivel de desigualdad de la renta disponible y el crecimiento medio de la renta per cápita de los diez años siguientes. Es más, la principal novedad introducida por estos últimos es que también establecen los vínculos entre la desigualdad y la duración de los episodios de crecimiento: a menos desigualdad, más años de crecimiento sostenido.

Sin embargo, las relaciones entre desigualdad y crecimiento no pueden analizarse exclusivamente mediante correlaciones simples que, por su propia naturaleza, no tienen en cuenta la influencia de muchas otras variables. En los primeros estudios empíricos el crecimiento de un país a lo largo de un periodo de tiempo se hacía depender de un conjunto de variables habituales, como la renta per cápita inicial, la escolarización, la tasa de inversión, la apertura exterior, el nivel de desarrollo financiero, la estabilidad política y variables ficticias regionales, al que se incorporaban diferentes indicadores de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. La evidencia empírica de esos primeros trabajos permitía concluir con un elevado grado de coincidencia que, efectivamente, la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza contribuye negativamente al crecimiento. Los efectos negativos de la desigualdad son incluso mayores y más robustos cuando se toma como indicador la distribución de la riqueza y, en particular, la distribución de la propiedad de la tierra. No obstante, algunos trabajos obtienen resultados diferentes e introducen matices que vale la pena considerar. Es el caso de Barro (2000) quien, en un extenso trabajo con diferentes especificaciones que incorporan numerosas variables de control e indicadores de desigualdad, concluye que esta retarda el crecimiento en los países con menores nivel de renta por habitante, pero lo promueve en los países avanzados, probablemente por las distorsiones provocadas por las ambiciosas políticas redistribu-

tivas, en forma de impuestos y transferencias, sobre el sistema de incentivos.

Aunque el balance final se inclina mayoritariamente del lado de quienes concluyen que la desigualdad afecta negativamente al crecimiento, lo que resta por explicar es el canal a través del cual se producen dichos efectos. Hace falta, por tanto, indagar en las teorías o enfoques que permitan desvelar los mecanismos y relaciones causales subyacentes entre desigualdad y crecimiento.

Existen tres enfoques principales que tratan de explicar las relaciones negativas entre desigualdad y crecimiento (González-Páramo, 1994). Expuestos en forma esquemática, son los siguientes:

- *Redistribución endógena*: en una democracia, una mayor desigualdad en la distribución de la renta de mercado genera una mayor demanda de políticas redistributivas (impuestos, transferencias, servicios públicos), que distorsionan la asignación de recursos y reducen, por tanto, la inversión en factores acumulables y la tasa de crecimiento.
- *Inestabilidad sociopolítica*: una mayor desigualdad aumenta la probabilidad de conflicto social, ampliando la incertidumbre sobre la garantía de los derechos de propiedad y deteriorando el clima laboral y político, con los consiguientes efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento.
- *Mercados imperfectos y educación*: en presencia de mercados de capitales imperfectos, una mayor desigualdad impide o limita la inversión en capital humano (educación, salud) de quienes no superan un determinado umbral de ingresos, disminuyendo el capital humano agregado y con él la tasa de crecimiento.

Redistribución endógena

El enfoque de la redistribución endógena, que tiene su formulación inicial entre otros, en los traba-

jos de Alesina y Rodrik (1994), Persson y Tabellini (1994) y Perotti (1993), se sustenta en un modelo con un componente político y otro económico. El primero, inherente a la propia democracia, vincula el nivel de desigualdad con las políticas públicas adoptadas por un gobierno que respondería a las demandas de los ciudadanos, mientras que el segundo relaciona dichas políticas con el crecimiento económico.

De acuerdo con el mecanismo político, el resultado que se impondría socialmente en un marco democrático se ajustaría a las preferencias del votante mediano, de modo que cuanto menor sea su renta o dotación de activos, mayor será el tipo impositivo y el nivel de gasto elegido. En consecuencia, el tamaño de la desigualdad determinaría la intensidad redistributiva de las políticas públicas.

El mecanismo económico relaciona las políticas públicas resultantes de la elección colectiva con el crecimiento. En el supuesto de que el gasto público sea, al menos en parte, productivo, la relación entre este y la tasa de crecimiento tendría la forma de una U invertida (Barro, 1990): para tipos impositivos bajos, prevalecería el efecto positivo del gasto productivo sobre la rentabilidad del capital, la inversión y el crecimiento, mientras que para tipos altos lo que predominaría es el efecto distorsionador de los impuestos que afectaría negativamente a esas mismas variables. En síntesis: a partir de un determinado nivel, más impuestos y más gastos se asocian a un menor crecimiento.

Interesa, por tanto, establecer por separado la contrastación de los dos mecanismos –político y económico– susceptibles de explicar los vínculos entre desigualdad y crecimiento. Una forma de comprobar hasta qué punto el mecanismo político desencadena un proceso redistributivo en un marco democrático es relacionando la desigualdad con las transferencias y gastos sociales, al entender que ambos recogen el núcleo fundamental de las políticas redistributivas. Sin embargo, los resultados no confirmaban la hipótesis de partida y por tanto, una mayor desigualdad no estaría conduciendo necesariamente a una política fiscal más redistributiva.

La explicación de tal resultado podría encontrarse en las bien conocidas limitaciones del teorema del votante mediano. Baste señalar aquí algunas de las más relevantes: el hecho de que las votaciones no tienen lugar sobre una sola cuestión, la menor participación política de los pobres en los procesos electorales o la influencia que ejercen los distintos grupos de presión sobre las decisiones de ingresos y gastos de los gobiernos. Todo ello debilitaría los posibles vínculos entre desigualdad y políticas redistributivas, refutando el proceso de transmisión entre la primera y las segundas.

No obstante, el problema puede no ser teórico, sino empírico y nos remite a cómo se mide la redistribución. En ocasiones se utilizan para tal fin indicadores de presión fiscal, transferencias o gasto social, pero puede que no sean adecuados por cuanto no todas las partidas de gasto social son progresivas, y otro tanto puede decirse de los impuestos y cotizaciones que las financian: en suma, el gasto social no siempre es redistributivo y, sobre todo, no lo es en igual medida en unos y otros programas. Por consiguiente, si lo que se quiere es estimar el efecto de la desigualdad sobre la redistribución, lo que se necesita es especificar correctamente los indicadores de redistribución en términos de la diferencia entre la desigualdad de la renta de mercado –las también denominadas rentas primarias– y la desigualdad de la renta disponible. Distintos trabajos ponen entonces de relieve que los países en los que la renta de mercado se distribuye de forma más desigual, realizan con mayor intensidad políticas redistributivas hacia los pobres. Si a la renta disponible se suma también el impacto redistributivo de servicios públicos como la educación o la sanidad –las denominadas transferencias en especie–, trabajos empíricos recientes obtienen asimismo resultados favorables al funcionamiento del mecanismo político, especialmente en los países avanzados. Un aumento en la desigualdad de la renta de mercado se asocia positivamente con un incremento de la redistribución pública, si bien el impacto es más elevado en los países de la OCDE.

La evidencia empírica tampoco parecía apoyar la hipótesis del mecanismo económico, el que

relaciona negativamente la redistribución con el crecimiento. Con algunas excepciones, la mayoría de los trabajos sobre gastos sociales y crecimiento económico arroja resultados positivos y significativos en lo que se refiere a la influencia de los primeros sobre el segundo. Entre la literatura más vinculada a la nueva economía del crecimiento, algunos autores ya obtenían apoyo empírico a la teoría que postula un efecto positivo de las transferencias sociales sobre el crecimiento económico, en cuanto amortiguan el conflicto social, que resultaría perjudicial para la inversión y el crecimiento. Ciertos programas de gasto del estado de bienestar, como la sanidad y especialmente la educación, resultan también inequívocamente favorables al crecimiento, a partir de los efectos de ambos sobre el nivel y la acumulación de capital humano de una economía. Pero también se formula la importancia de la redistribución en la configuración de una clase media con capacidad de gasto e influencia positiva sobre la demanda global y, por tanto, sobre la actividad productiva.

Sin embargo, igual que sucedía en la contrastación del mecanismo político, también aquí se habrían tomado los gastos sociales en lugar de indicadores directos de la redistribución, a pesar de que no puede afirmarse con generalidad que dichos gastos sean todos ellos inequívocamente redistributivos. De modo que lo que en el primer caso servía como argumento para cuestionar la falta de relación entre desigualdad y políticas redistributivas, debería también mantenerse ahora para poner en tela de juicio los resultados obtenidos al vincular la redistribución con el crecimiento. Lo que se ha podido confirmar es que los gastos sociales en conjunto, y las transferencias en particular, ejercen una influencia positiva sobre el crecimiento, pero si bien es cierto que este tipo de gastos suelen tener una importante potencialidad redistributiva, vale la pena, si se dispone de datos, contrastar el mecanismo económico tomando directamente indicadores de redistribución. Esta se calcula en términos de la diferencia entre la desigualdad de la renta de mercado y de la renta disponible, medidas por ejemplo en ambos casos por el índice de Gini.

Pues bien, trabajos como el de Ostry, Berg y Tsangarides (2014), en los que la tasa de crecimiento del PIB per cápita a medio plazo se hace depender de la renta inicial, de la desigualdad en la distribución de la renta disponible y del tamaño de la redistribución, no encuentran relaciones significativas –presuntamente negativas– entre redistribución y crecimiento, tanto cuando únicamente se toman esas tres variables como cuando se incluyen otras variables de control, como la inversión, el nivel educativo, las instituciones políticas o el grado de apertura de la economía. La explicación descansaría en que los efectos positivos y negativos de las políticas redistributivas sobre el crecimiento, se neutralizarían entre sí. Por una parte, las políticas sociales a través de las cuales se instrumenta el proceso de redistribución desde el sector público –educación, sanidad, pensiones, servicios sociales– influirían positivamente en el crecimiento, pero por otra, los efectos distorsionadores de los impuestos y de determinadas prestaciones actuarían en sentido contrario, sobre todo cuando se alcanza un nivel elevado de impuestos y gastos. En suma, cuando se mide de manera directa, mediante su inclusión en una ecuación de crecimiento, el efecto total de la redistribución, bajo el supuesto de desigualdad constante, arroja coeficientes muy pequeños y poco significativos, por lo que no puede decirse que aquella suponga un daño para la tasa de crecimiento a medio plazo.

La redistribución representa, por definición, una reducción de la desigualdad, y este vínculo de la redistribución con la reducción de la desigualdad es el que desemboca en un resultado inequívocamente favorable al crecimiento, a pesar de sus potenciales efectos negativos sobre el sistema de incentivos, si es que los hubiere.

Además, el mencionado trabajo así como otro anterior de Berg y Ostry (2011) también encuentran evidencia sobre los efectos de la desigualdad y la redistribución en la duración de los periodos de crecimiento de los países. Las conclusiones están en consonancia con las anteriormente seña-

ladas. Cuanto mayor es la desigualdad, menor es la duración esperada de los periodos de crecimiento, mientras que la redistribución no tiene una influencia significativa al respecto. Únicamente, cuando la redistribución es ya muy elevada, se obtienen resultados negativos y significativos sobre la duración de los periodos de crecimiento.

¿Cómo podemos conciliar, finalmente, los resultados obtenidos en este enfoque de la redistribución endógena? ¿Cómo podemos explicar que cuanto mayor es la desigualdad menor es la tasa de crecimiento de un país y, al mismo tiempo, las políticas redistributivas –que son más intensas cuanto más elevada es la desigualdad– no tienen efectos significativos sobre el crecimiento? La respuesta no es del todo inmediata. La redistribución representa, por definición, una reducción de la desigualdad, y este vínculo de la redistribución con la reducción de la desigualdad es el que desemboca en un resultado inequívocamente favorable al crecimiento, a pesar de sus potenciales efectos negativos sobre el sistema de incentivos, si es que los hubiere.

Inestabilidad sociopolítica

El enfoque de la inestabilidad sociopolítica sostiene que una distribución muy desigual y polarizada de la renta deteriora el clima laboral, crea incentivos para la subversión del orden social y desestabiliza la situación política. Todo ello aumenta el nivel esperado de imposición, trastorna el funcionamiento de la actividad productiva y eleva la incertidumbre sobre el curso de la política económica, la protección de los derechos de propiedad y la primacía del derecho, aumentando el riesgo y reduciendo la tasa esperada de rendimiento de la inversión: el resultado es una caída de la tasa de inversión y del crecimiento.

Trabajos pioneros como el de Barro y Sala-i-Martin (1995), en los que la inestabilidad sociopolítica se mide por el número de revoluciones y golpes, y por otros indicadores de violencia política, ya obtenían asociaciones negativas y significativas entre esas variables y la tasa de crecimiento.

La cuestión que ahora se trata de dilucidar es si la inestabilidad sociopolítica actúa como mecanismo transmisor de los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento y, por tanto, si las políticas redistributivas –de reducción de la desigualdad– pueden atemperar el conflicto social y contribuir positivamente a la obtención de tasas de crecimiento a medio y largo plazo.

La cuestión que se trata de dilucidar es si las políticas redistributivas –de reducción de la desigualdad– pueden atemperar el conflicto social y contribuir positivamente a la obtención de tasas de crecimiento a medio y largo plazo.

La nueva teoría del crecimiento contempla la posibilidad de que el sector público pueda influir positivamente sobre la tasa de crecimiento a largo plazo, si bien sus efectos dependerían del tamaño alcanzado por el sector público. En todo caso, la clave estaría en que los bienes y servicios suministrados por el Estado entren o no dentro del concepto de actividades “productivas”, esto es, que conjuntamente con el capital privado permitan fijar una senda de crecimiento permanente. En relación con los gastos sociales, la propia literatura del crecimiento reconoce que los gastos en educación y probablemente también los de sanidad, en cuanto contribuyen a la formación de capital humano, presentarán coeficientes positivos en las ecuaciones de crecimiento. En cambio, el signo esperado de las transferencias era, en la mayor parte de los modelos teóricos, negativo, dado que el análisis microeconómico de este tipo de prestaciones tiene en cuenta sus efectos sobre la oferta de trabajo, la tasa de ahorro privado o la búsqueda de empleo.

Sin embargo, en un elevado número de trabajos empíricos las transferencias sociales aparecen, como ya se ha dicho, con signo positivo. Hasta no hace mucho tiempo la literatura era muy cautelosa al interpretar estos resultados, quizá porque no se encontraban argumentos teóricos en los que apoyarse. Pero el estudio de los determinantes sociales, institucionales y políticos del crecimiento y, en especial, la relación entre desigualdad y

crecimiento, ha proporcionado un buen soporte teórico al signo positivo de las variables de gasto social, reforzado además por trabajos empíricos más recientes.

Las políticas de reducción de la desigualdad pueden interpretarse como compensaciones redistributivas que reducen la probabilidad de conflicto y la inestabilidad sociopolítica. En esta línea se sitúa por ejemplo un trabajo de Sala-i-Martin (1997) que analiza el papel de las transferencias de renta, en un modelo de crecimiento endógeno con sector público, como una forma de “sobornos” frente a la comisión de delitos o la subversión del orden social. Aunque pudieran existir efectos distorsionadores derivados de la imposición con los que se financian las políticas sociales, estas aumentan la probabilidad de mantenimiento de los derechos de propiedad, de modo que se asegura la recuperación de la inversión y se favorece el crecimiento. Los trabajos más relevantes que contrastan las relaciones entre desigualdad, inestabilidad sociopolítica y crecimiento (Perotti, 1996 y Alesina y Perotti, 1996) confirman que cuanto mayor es la desigualdad, mayor es el grado de inestabilidad sociopolítica y cuanto más inestable es la situación política, menores son las tasas de inversión y de crecimiento.

Las políticas redistributivas contribuyen a reducir el potencial de conflicto social generado por la desigualdad, la pobreza y la polarización social y pueden también ser contempladas como políticas de promoción del crecimiento.

La conclusión es que las políticas redistributivas contribuyen a reducir el potencial de conflicto social generado por la desigualdad, la pobreza y la polarización social. Puesto que la inestabilidad sociopolítica actúa de forma negativa sobre la tasa de crecimiento, las políticas sociales pueden también ser contempladas desde este enfoque como políticas de promoción del crecimiento. Así por ejemplo, Dutt y Mitra (2008) confirman la influencia que la desigualdad ejerce sobre la inestabilidad política, tomando como indicador de esta última los cambios de régimen político de dictadura a

democracia y viceversa. Dichas alteraciones en el sistema político acarrearán una mayor volatilidad de las políticas económicas y es precisamente esta volatilidad la que provocaría una mayor fluctuación de la inversión y la producción, y en definitiva, una menor tasa de crecimiento.

Mercados imperfectos y educación

La educación, entendida como una forma de inversión en los seres humanos, es un factor clave en todo proceso de crecimiento económico. Tras las primeras aportaciones de Schultz y Becker, la incorporación del concepto de capital humano a los modelos formales de crecimiento ha sido una constante cualesquiera que fueran las bases teóricas en las que estos se sustentaban. Aunque la inversión en capital humano comprende no solo la educación, sino también la formación en el trabajo, la adquisición de conocimientos mediante la búsqueda de empleo o la mejora de la salud, la referencia más frecuente en los trabajos que incluyen el capital humano entre los determinantes de la producción es su identificación con el sector educativo: se entiende que la educación es el medio principal a través del cual se produce capital humano y este es, por consiguiente, capital educativo. Además, los vínculos entre capital humano y crecimiento no solo relacionan el crecimiento económico con la acumulación de capital humano, como un *input* ordinario de la función de producción, sino que el propio *stock* de capital humano existente en la economía es la fuente principal del cambio técnico.

Ahora bien, cuando se toman en consideración las externalidades asociadas al *stock* de capital humano o cuando se analizan las complementariedades entre la educación y las actividades de I+D+i, se está reconociendo que el rendimiento privado de la inversión en educación es inferior al rendimiento social, de manera que la corrección de este y otros fallos de mercado –como la denominada externalidad “cívica”– justificaría la intervención pública en el sector educativo mediante la regulación y la financiación de la inversión en capital humano.

Pero aún hay una razón más poderosa para legitimar, desde la óptica del crecimiento, la actuación del Estado: la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza y sus consecuencias sobre la inversión en capital humano. El problema se plantea porque en ausencia de intervención pública la inversión en capital humano no solo sería inferior a la óptima por la diferencia entre la rentabilidad social y privada de la educación –las ya comentadas externalidades positivas–, sino porque las imperfecciones de los mercados de capitales impedirían el acceso a la financiación privada a los individuos con menores recursos económicos, aunque tuvieran talento suficiente para rentabilizar esa inversión (Galor y Zeira, 1993). Los problemas surgen, entre otras razones, porque la información es imperfecta y asimétrica, lo que genera restricciones de liquidez para los sujetos con menor nivel de renta o riqueza familiar, que ni siquiera podrían obtener financiación privada para sus estudios sobre la garantía de sus futuros ingresos. La inversión en educación estará así condicionada por dichas restricciones presupuestarias iniciales, que lastran de forma determinante el desarrollo de las capacidades individuales. Los ingresos posteriores, las herencias y los efectos de la desigualdad se transmiten a su vez de una a otra generación, afectando a la tasa de crecimiento de la economía. La conclusión es que una distribución más igualitaria de la renta y la riqueza relaja las restricciones de liquidez de los más pobres y aumenta la inversión en capital humano, extendiendo sus efectos positivos sobre la productividad y alcanzando, en último término, mayores tasas de crecimiento económico.

Los efectos de la redistribución en la formación de capital humano fueron analizados por Perotti (1993) en un modelo típico de votante mediano en el que este debe elegir un determinado nivel de imposición con el que efectuar las políticas redistributivas, comparando la pérdida de bienestar ocasionada por los impuestos con la ganancia esperada por el efecto positivo del capital humano total de la economía sobre su propia productividad y su renta futura, en virtud de las externalidades educativas. La alteración de la distribución inicial de la renta en un sentido de mayor igualdad limi-

taría el efecto de las restricciones de liquidez sobre la inversión en capital humano, promoviendo un mayor crecimiento y una menor desigualdad en las rentas futuras. En todo caso, las conclusiones varían según el nivel de desarrollo de cada país.

Si nos centramos, por tanto, en los países avanzados y suponemos que la desigualdad es muy grande, el votante mediano desencadenaría un proceso de fuerte contenido redistributivo, con un elevado gasto en educación; y a pesar de las distorsiones asociadas a los impuestos y de las posibles secuelas sobre los incentivos a la acumulación de capital humano, casi todos los modelos predicen un impacto final positivo sobre el crecimiento gracias al efecto de la redistribución sobre la educación de los pobres. Pero conforme la desigualdad se reduce por el propio efecto igualitario de la educación, el apoyo a la redistribución se debilita, de modo que el gasto público en educación perdería peso y se reduciría el crecimiento.

No hay dudas sobre la caracterización de la educación como un elemento básico de la política de crecimiento. Sin embargo, ni todo el gasto educativo tiene los mismos efectos, ni el modo en que se organiza es neutral en términos de crecimiento.

No obstante, la evidencia no parece confirmar algunas de esas predicciones. Ni la disminución de las desigualdades en los países ricos ha llevado consigo la reducción del gasto público en educación, ni las mayores desigualdades en los países pobres han dado lugar a mayores gastos en educación y tasas de crecimiento más elevadas que en los países ricos. En todo caso, las conclusiones que se deducen de la mayoría de los trabajos apenas ofrecen dudas sobre la caracterización de la educación como un elemento básico de la política de crecimiento. Sin embargo, ni todo el gasto educativo tiene los mismos efectos sobre el crecimiento, ni el modo en que se organiza el sector es neutral en términos de crecimiento. Los distintos patrones de política educativa en Iberoamérica y

en los llamados dragones asiáticos pueden ayudar a comprender las menores tasas de crecimiento de la primera en el pasado reciente.

A modo de conclusión

En un país como España, con un elevado nivel de desigualdad, esta puede ser una rémora para la recuperación de un crecimiento estable capaz de generar empleo a medio y largo plazo. La pregunta con que iniciábamos este artículo encuentra abundantes argumentos teóricos y empíricos para ser respondida en el sentido que ahora manifestamos. La literatura sobre crecimiento económico de los últimos veinte años mayoritariamente concluye que la desigualdad es perjudicial para el crecimiento, sobre todo cuando se superan determinados niveles que ponen en riesgo la estabilidad social o la inversión en capital humano.

La redistribución, por tanto, no daña el crecimiento. En un país con un problema estructural de insuficiencia de ingresos públicos y con un gasto social muy por debajo de la media europea no parece que el aumento de la presión fiscal vaya a desencadenar un proceso distorsionador en la asignación de recursos capaz de desbaratar los efectos positivos sobre el crecimiento del gasto público en educación, pensiones o sanidad. No es arriesgado afirmar que en España crecimiento, redistribución e igualdad pueden caminar en la misma dirección durante un trecho aún bastante largo.

Sin embargo, también existen importantes matices que conviene tomar en consideración a los efectos de elegir bien las políticas económicas que mayor compatibilidad demuestran por su contribución conjunta al crecimiento y la reducción de la desigualdad. Todas las actuaciones sobre el mercado de trabajo destinadas a mejorar la empleabilidad de los parados, así como a promover una mayor equidad en el acceso a una educación de más calidad, y a compensar socialmente a los colectivos sociales más castigados por la pobreza y la exclusión social, son apuestas seguras en la dirección correcta.

Referencias

- ALESINA, A., y PEROTTI, R. (1996), "Income distribution, political instability, and investment", *European Economic Review*, 40: pp. 1203-1228.
- ALESINA, A., y RODRIK, D. (1994), "Distributive politics and economic growth", *Quarterly Journal of Economics*, 109: pp. 465-490.
- BANDRÉS, E., y GARCÍA DELGADO, J.L. (2000), "Estado de bienestar y crecimiento económico", en S. MUÑOZ MACHADO, J.L. GARCÍA DELGADO, y L. GONZÁLEZ SEARA (dirs.), *Las estructuras del bienestar en Europa*, Madrid, Civitas y Fundación ONCE: pp. 183-303.
- BARRO, R.J. (1990), "Government spending in a simple model of endogenous growth", *Journal of Political Economy*, 98: pp. S103-S125.
- (2000), "Inequality and growth in a panel of countries", *Journal of Economic Growth*, 5: pp. 5-32.
- BARRO R.J., y SALA-I-MARTIN, X. (1995), *Economic growth*, McGraw-Hill, New York.
- BERG, A.G., y OSTRY, J.D. (2011), "Inequality and unsustainable growth: two sides of the same coin?", *IMF Staff Discussion Note*, 11/08, International Monetary Fund.
- DUTT, P., y MITRA, D. (2008), "Inequality and instability of polity and policy", *The Economic Journal*, 118: pp. 1285-1314.
- GALOR, O., y ZEIRA, J. (1993), "Income distribution and macroeconomics", *Review of Economic Studies*, 60: pp. 35-52.
- GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M. (1994), "Gasto social y crecimiento económico en el Estado de Bienestar", *Hacienda Pública Española*, monografía núm. 2: pp. 135-153.
- OECD (2012), *Economic Policy Reforms 2012. Going for growth*, cap. 5: "Reducing income inequality while boosting economic growth: can it be done?", París: pp. 181-202.
- OSTRY, J.D.; BERG, A., y TSANGARIDES, C.G. (2014), "Redistribution, inequality and growth", *IMF Staff Discussion Note*, 14/02, International Monetary Fund.

PEROTTI, R. (1993), "Political equilibrium, income distribution, and growth", *Review of Economic Studies*, 60: pp. 755-776.

— (1996), "Growth, income distribution, and democracy: what the data say", *Journal of Economic Growth*, 1: pp. 149-187.

PERSSON, T., y TABELLINI, G. (1994), "Is inequality harmful for growth?", *American Economic Review*, 84: pp. 600-621.

PIKETTY, T. (2014), *Capital in the Twenty-first century*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.).

SALA-I-MARTIN, X. (1997), "Transfers, social safety nets, and economic growth", *IMF Staff Papers*, 44: pp. 81-102.

STIGLITZ, J.E. (2012), *El precio de la desigualdad*, Madrid, Taurus.